

RESOLUCION ADMINISTRATIVA EJECUTIVA
Nro. 110-AL-GADMPVM-2026

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA Y PUBLICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN “CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución;

Que, el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, que constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y que por lo tanto es esencial para la vida;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 32 establece: *“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin*

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador determina como derecho y garantía de las personas a una vida digna, que asegure la salud y saneamiento ambiental;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 226, establece que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.*

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227 establece que: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”*

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 229 establece que: *“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa,*

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia”.

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: *“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.*

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: *“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”.*

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 239 establece que: *“El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”.*

Que, la Constitución de la República en el artículo 240 establece que: *“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.*

Que, la Constitución de la República en el primer inciso del artículo 242 establece: *“El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales”.*

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 253, establece: *“Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo estará representado proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la ley”.*

Que, la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 260, 261, 262, 263, 264 y 265, establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio

con concurrente de la gestión en la prestación de los servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 389 establece: *“Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.”*

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley (...).”

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 390 establece: *“Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.”*

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303, del 19 de octubre del 2010, establece los alcances de las rectorías sectoriales, siendo los servicios públicos una de ellas;

Que, el COOTAD en el artículo 6 establece: *“Art. 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República (...).”*

Que, el COOTAD en el artículo 7 establece: *“Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley (...).”*

Que, el COOTAD en el artículo 9 establece: *“Art. 9.- Facultad ejecutiva.- La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales,*

prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales”.

Que, el COOTAD en el artículo 54 establece: “*Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; (...) k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales (...)*”.

Que, el COOTAD en el artículo 55 establece: “*Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; (...) b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; (...) d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley (...)*”.

Que, el COOTAD en el artículo 60 Establece: “*Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico; b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal; (...) o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación (...)*”.

Que, el artículo 137 del COOTAD, establece: Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- Las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población.

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la prestación del servicio público de agua potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido técnicamente.

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.

La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de solidaridad, obligatoriedad, generalidad uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos servicios serán equitativos, a través de tarifas diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual se establecerán mecanismos de regulación y control, en el marco de las normas nacionales.

De manera complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales gestionarán, coordinarán y administrarán los servicios públicos que le sean delegados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Vigilarán con participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los servicios públicos existentes en su jurisdicción.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán alianzas con los sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente con las juntas administradoras de agua potable y alcantarillado existentes en las áreas rurales de su circunscripción. Fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas comunitarios. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán delegar las competencias de gestión de agua potable y alcantarillado a los gobiernos parroquiales rurales.

Todas las instancias responsables de la prestación de los servicios deberán establecer mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores y consumidoras; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Que, el artículo 140 del COOTAD establece: “La gestión integral del riesgo de desastres que afecten al territorio se ejecutará por los gobiernos autónomos descentralizados en atención al principio de descentralización subsidiaria, de manera coordinada, concurrente y de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia, los planes nacionales respectivos y los lineamientos expedidos por el ente rector de la gestión integral del riesgo de desastres. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial. (...)”;

Que, el artículo 5 numeral 7 de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres -LOGIRD- define como “Emergencia: Ocurrencia de una situación desencadenada por uno o más eventos adversos de origen natural o antrópico que afectan la seguridad, medios de vida y bienes de las personas, la continuidad del ejercicio de los derechos de las personas o el funcionamiento normal de una comunidad o zona y que requiere de acciones inmediatas y eficaces de los gobiernos autónomos descentralizados y de las demás las entidades que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres”;

Que, el artículo 13 de la LOGIRD indica: “*La respuesta ante emergencias y desastres se refiere al conjunto de medidas necesarias adoptadas durante o inmediatamente después de una emergencia o desastre para garantizar el derecho a la vida, la integridad física y la protección de la población afectada. En ejercicio de sus competencias para la comprensión, conocimiento, previsión y monitoreo del riesgo de desastres, los regímenes especiales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos provinciales, en coordinación con la entidad rectora de la gestión integral del riesgo de desastres, las instituciones del gobierno central e, institutos y organismos técnicos científicos y otros actores del Sistema, la implementación de medidas y acciones para el análisis, evaluación y previsión del riesgo en su territorio (...)*”;

Que, el artículo 65 de la LOGIRD, establece: “*Con base en el informe técnico justificativo y a criterio del Comité de Operaciones de Emergencia responsable, las autoridades locales de conformidad con sus competencias constitucionales y legales declararán el estado de emergencia en sus respectivos ámbitos territoriales cumpliendo, para el efecto, con los criterios y parámetros normados en el reglamento general de aplicación de esta ley. Las autoridades locales estarán obligadas a rendir cuentas a los*

órganos de fiscalización y control de recursos públicos competentes una vez que la emergencia haya concluido (...);

Que, el artículo 66 de la LOGIRD señala: “La declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre estarán encaminada a responder a los efectos e impactos negativos propios que genera el desastre y a impedir su extensión. La declaratoria tendrá una duración de hasta noventa días, renovable las veces que la atención a la emergencia o desastre lo requiera. La declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre permitirá: 1. La activación de todas las entidades de los diferentes niveles de gobierno presentes en el territorio o de otros sectores, para la atención y respuesta a la emergencia bajo las directrices del Comité de Operaciones de Emergencia responsable, respetando las competencias de cada entidad. 2. La activación de aquellas entidades del nivel nacional que no tengan presencia en ese territorio o sean parte de ese sector, pero que por sus competencias se requiera su participación para atender y responder a la emergencia o desastre. 3. Facilitar el cumplimiento de las características de concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva de la situación de emergencia que sustente una declaratoria de emergencia en contratación pública, conforme la ley de la materia, exclusivamente en acontecimientos que estén relacionados con el objeto de la presente ley. 4. Habilitar a todas las entidades del sector público activadas, la formulación y aprobación de las modificaciones presupuestarias dentro y entre grupos de gastos permanentes y no permanentes. 5. Aplicación de medidas de cumplimiento obligatorio como horarios de circulación, horarios de atención en determinadas actividades económicas, sociales, culturales, requisitos para el ingreso en puertos y aeropuertos, medidas de control sanitario, suspensión de eventos, entre otras atendiendo a la naturaleza del desastre. 6. Establecimiento de multas por incumplimiento de medidas de cumplimiento obligatorio. 7. Medidas específicas para grupos de atención prioritaria. 8. Delimitación de las zonas geográficas afectadas. 9. Habilitar al ente encargado de la gestión y administración de los bienes del Estado para que, de conformidad con el Reglamento General de Aplicación de la presente Ley y previo informe del ente rector de la gestión integral del riesgo de desastres, autorice o disponga el uso o destino temporal o definitivo de los bienes bajo su administración para establecimiento de alojamientos temporales, o realización de tareas de prevención, mitigación, remediación, limpieza de cunetas, canales y vías, desazolvé de ríos, retiro de escombros, entre otros. La Reglamentación observará la naturaleza expedita que requieren los procesos, procedimientos y las autorizaciones respectivas. 10. Otras determinadas en el reglamento general de aplicación de la presente ley. Las medidas a las que se refieren los numerales 5 y 6 del presente artículo serán aplicadas bajo criterio de trato digno, necesidad y proporcionalidad y estarán sujetas a control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El cobro y recaudación de las multas serán responsabilidad de los gobiernos locales con capacidad y competencia para ello y del ente rector de la gestión integral del riesgo de desastres cuando la declaratoria sea de carácter nacional”;



Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 58 establece: *“Declaratoria de emergencia.- Para atender las situaciones de emergencia definidas en esta Ley, previamente a iniciarse cualquier contratación, la máxima autoridad de la entidad contratante deberá emitir una resolución motivada que declare la emergencia para justificar las contrataciones, dicha resolución se publicará de forma inmediata a su emisión en el Portal de Contratación Pública. La facultad de emitir esta resolución no podrá ser delegable. El SERCOP establecerá el tiempo de publicación de las resoluciones emitidas como consecuencia de acontecimientos graves de carácter extraordinario, ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano.*

Para el efecto, en la resolución se calificará a la situación de emergencia como concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, así mismo se declarará la imposibilidad de realizar procedimientos de contratación comunes que permitan realizar los actos necesarios para prevenir el inminente daño o la paralización del servicio público.

El plazo de duración de toda declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a sesenta (60) días, y en casos excepcionales podrá ampliarse bajo las circunstancias que determine el SERCOP”.

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 59 establece: *“Contrataciones de emergencia.- La entidad contratará bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato, sin que se excluya de este tipo de procesos la entrega de garantías indispensables para el buen uso de recursos públicos, que fueren pertinentes acorde a la Ley.*

Las contrataciones que se efectúen producto de la declaratoria de emergencia tendrán relación directa y objetiva con el problema o situación suscitada. No se podrá utilizar la emergencia para realizar contrataciones que se encontraban planificadas en la entidad, salvo que la contratación fuese estrictamente necesaria y tenga relación directa con la situación de emergencia.

En ningún caso las contrataciones realizadas bajo este procedimiento serán usadas para solventar las omisiones o deficiencias en la planificación institucional; o, evadir los procedimientos de contratación pública.

Tampoco se podrá realizar contrataciones cuyo plazo de ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la declaratoria de emergencia; caso contrario, este tipo de contrataciones constituirán la presunción de hecho de que la contratación no fue necesaria para superar la situación de emergencia.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 3 numeral 33 establece: *“Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”*.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 63 establece: *“Planificación de la compra.- En todo procedimiento de contratación pública, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y las personas responsables de la gestión de las adquisiciones, deberán considerar las siguientes directrices de planificación de la compra:*

- 1. Las contrataciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas;*
- 2. La ejecución de las contrataciones programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente tome el trámite; y,*
- 3. Toda compra que se efectúe o proceso de contratación pública, deberá fundamentarse y limitarse en las competencias institucionales.*

Sólo por excepción, en las contrataciones por emergencia, no se aplicarán estas directrices generales”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 80 establece: *“Modelos obligatorios de pliegos.- Los modelos de pliegos observarán la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General, y las normas y/o políticas emitidas por el Directorio del SERCOP. Abarcarán las regulaciones para llevar a cabo las fases: precontractual, suscripción, y contractual.*

El SERCOP emitirá los modelos obligatorios de pliegos para todos los procedimientos de contratación pública, excepto ínfima cuantía, catálogo electrónico, adquisición de bienes inmuebles, y contrataciones en situación de emergencia; sin perjuicio de que el SERCOP facilite a las entidades contratantes formatos no obligatorios de documentos, aplicables a este tipo de procedimientos.

Para la construcción de los modelos obligatorios de pliegos se considerará las disposiciones establecidas en la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, aplicando criterios de simplificación y evitando la sobrerregulación”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 93 establece: “Reglas de participación.- Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación de oferentes en todos los tipos de procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a excepción de los procedimientos de Régimen Especial establecidos en los numerales 2 y 6 del artículo 38 de la referida Ley, los de catálogo electrónico, ínfima cuantía y declaratoria de situación de emergencia (...)”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 303 establece: “Regulaciones adicionales a la declaratoria.- Cuando la emergencia se refiera a situaciones que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la definición que consta en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

Junto con la publicación de la resolución motivada que declara la emergencia, se establecerá en el Portal de Contratación Pública la fecha de inicio de la situación de emergencia, para fines de control.

Para el caso de catástrofes naturales en las que no se tenga acceso a conexión de internet, la entidad contratante podrá publicar la resolución que declara la emergencia en contratación pública, en un término máximo de quince (15) días posteriores a su emisión.

La declaratoria de estado de excepción efectuada por el Presidente de la República, la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, o las resoluciones de los comités de operaciones de emergencia, no suplen ni son requisito previo para la declaratoria de emergencia en contratación pública que cada entidad contratante debe emitir y publicar.

Los órganos o entidades centrales o matrices podrán avocar competencias de sus órganos o entidades desconcentradas a efectos de declarar la emergencia en contratación pública y llevar a cabo las contrataciones en situación de emergencia, de ser el caso. La resolución motivada que declara la emergencia será publicada en el Portal de Contratación Pública, hasta el término máximo de tres (3) días posteriores a la fecha de su emisión”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 304 establece: “Plazo de duración de la declaratoria de emergencia.- El plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a sesenta (60) días. Dicho plazo podrá ampliarse excepcionalmente, en los siguientes casos:

1. Cuando se encuentren vigentes: el estado de excepción decretado por el Presidente de la República, la declaratoria del estado de emergencia sanitaria o las resoluciones de los comités de operaciones de emergencia, relacionados a la situación de emergencia. Para el efecto, la entidad contratante deberá expedir el acto administrativo que justifique la ampliación del plazo;

2. Cuando existan razones técnicas que acrediten y sustenten que el contrato debe ejecutarse y cumplirse en un tiempo de mayor duración; el plazo máximo para la ejecución de la contratación será de un (1) mes adicional; o,

3. Cuando se trate de obras, incluidas las obras de infraestructura y equipamiento de agua potable y saneamiento ambiental, considerando que el proyecto de emergencia busca recuperar el servicio mínimo de la infraestructura, el plazo máximo para la ejecución de un proyecto de emergencia, será de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del contrato, salvo que esta afecte a sectores estratégicos o servicios públicos, en la cual será de máximo doce (12) meses.

En todos los casos, las entidades contratantes deberán emitir los informes técnicos respectivos que justifiquen las causas para que el contrato se ejecute y cumpla en un tiempo de mayor duración y el correspondiente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el presente Reglamento General”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 305 establece: *“Generalidades contrataciones en situación de emergencia.- La presunción de hecho establecida en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública será refutada si las entidades contratantes justifican que existen razones técnicas que acreditan y sustentan que el contrato celebrado en el período de declaratoria de emergencia, destinado a superarla, deba ejecutarse y cumplirse en un tiempo mayor de duración, como cuando debe construirse una obra, para evitar o prevenir que se cause ruina en otra infraestructura o se impida un daño mayor. Para tal efecto se contará con los informes técnicos respectivos que constarán en el expediente de la emergencia.*

No se realizará procedimiento de emergencia, tratándose de bienes y servicios que consten en el catálogo electrónico; salvo que la entidad contratante establezca la inconveniencia de la provisión de los bienes y servicios catalogados, por razones de orden técnico o de oportunidad en su provisión o cualquier otra circunstancia que, a su criterio, impida atender o superar la situación de emergencia, particular que constará en el expediente de la emergencia. Sin perjuicio de las contrataciones que se realicen por la declaratoria de emergencia, la entidad contratante podrá continuar ejecutando contrataciones bajo el régimen común”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 306 establece: *“Procedimiento.- La entidad contratante realizará la selección de proveedores transparente, conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, utilizando por regla general la herramienta que el SERCOP habilite para el efecto en el Portal de Contratación Pública. En la referida herramienta la entidad contratante deberá publicar su necesidad de contratación con las especificaciones técnicas o términos de referencia respectivos.*

Si una vez publicado el pedido, no se remiten proformas, la entidad podrá obtenerlas directamente. Si por la naturaleza de la situación de emergencia, no se tuviera acceso a conexión de internet, se podrá obtener las proformas directamente.

Sobre la base de las propuestas que reciba la entidad, seleccionará a la que más convenga a los intereses institucionales, verificando que cumplan los requisitos, conforme lo previsto en los incisos quinto y sexto del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La actividad económica u objeto social de los proveedores que participen deberá estar relacionada con el objeto de la contratación. De celebrarse el contrato contraviniendo esta norma, se aplicará lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin perjuicio de las responsabilidades que determine el organismo de control competente”.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 309 establece: *“Informe.- Una vez realizada la contratación necesaria y superada la situación de emergencia, la entidad contratante deberá publicar en la herramienta "Publicaciones de Emergencia", vinculada a la declaratoria inicial, el informe emitido por la máxima autoridad o su delegado, que obligatoriamente contendrá lo siguiente:*

- 1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia;*
- 2. Número de contratos, órdenes de compra o facturas generadas para superar la emergencia;*
- 3. Objeto de cada contrato efectuado, órdenes de compra o facturas generadas;*
- 4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC;*
- 5. Plazo de duración de la emergencia;*
- 6. Valor de cada contrato, órdenes de compra o facturas generadas, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emergencia;*

Que, la Codificación del Código Civil en el artículo 30 establece: *“Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”*

Que, mediante Informe Técnico Nro. 02, de fecha 22 de abril de 2026, suscrito por el Director de Agua Potable y Alcantarillado y Director de Movilidad y Obras Públicas, señalando *“CONCLUSIONES El evento ocurrido el 21 de abril de 2026 fue ocasionado por precipitaciones intensas que generaron un colapso en la red existente de hormigón simple de diámetro de 500mm. Se produjo afectación al lote 57 del barrio la Isla,*

ocasionando un socavón en la cimentación de la vivienda y poniendo en riesgo la estabilidad de la edificación. En el lote 56 del barrio la Isla, existen vertientes naturales que evacuan hacia el lote 57. Desagüe de aguas lluvias de un porcentaje del estadio alimenta a la tubería de 500mm de hormigón simple que cruza los lotes 56 y 57 del barrio la Isla. La tubería existente se encuentra colapsada y difícil de reparar, por lo que el riesgo es alto de colapso de la cimentación de la vivienda del lote 57 ya que esta fue construida sobre relleno. Al no realizar una variante en el menor tiempo posible con tubería PVC y encausar las aguas lluvias y aguas producto de la vertiente colapsara en su totalidad la infraestructura en el lote 57. Se debe evacuar las aguas en el socavón existente por medio de motobombas ya que al tratarse de relleno el suelo es inestable y con la presencia de agua se lava los finos y pierde la capacidad cohesiva provocando que crezca el socavón. 6. RECOMENDACIONES Ejecutar las medidas a corto plazo de manera inmediata para impedir el ingreso de caudales adicionales a la tubería de hormigón simple existente”.

Que, mediante Resolución Nro. 002-COECPPM-2026, de fecha 22 de abril de 2026, el COE Cantonal de Pedro Vicente Maldonado, en sesión extraordinaria del día miércoles 22 de abril del 2026, resolvió “Artículo 1.- Declarar en emergencia al Cantón Pedro Vicente Maldonado especialmente a la Cabecera Cantonal por la afectación directa de la época invernal. Artículo 2.- Asignar los recursos económicos necesarios para atención de la emergencia (...)”.

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-DAPA-2026-0703-M, de fecha 26 de abril de 2026, suscrito por el Ing. Kleber Geovanni Cajamarca Quishpe, Director de Agua Potable y Alcantarillado, dirigido al Alcalde, señalando “Con estos antecedentes Sr. Alcalde, la Dirección de agua potable y alcantarillado remite el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, por un monto de \$176,871.83 (ciento setenta y seis mil ochocientos setenta y un dólares, 83/100 centavos, No incluye IVA), con un plazo de 30 días, por lo que se adjunta lo siguiente. Perfil del proyecto emergente Planos Especificaciones técnicas Apus Presupuesto Memoria técnica Calculo de volúmenes de obra Permiso ambiental VAE Así mismo esta dirección recomienda lo siguiente. Ejecutar de manera emergente el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, con el fin de atender de forma oportuna la problemática identificada tras el colapso del sistema existente, restableciendo las condiciones adecuadas de conducción y evacuación de los caudales pluviales y de las vertientes existentes. La asignación de recursos para este proyecto emergente deberá efectuarse de manera oportuna, para garantizar su pronta ejecución. La modalidad de contratación deberá ser la adecuada para una intervención rápida en el sistema existente ya que con

cada precipitación aumenta el riesgo de afectación a la infraestructura de la vivienda del lote 57”.

Que, mediante Informe Nro. GADMPVM-ASJ-2026-0028-I, de fecha 27 de abril de 2026, suscrito por el Abg. Mauricio Lorenzo Vera Ayora, Procurador Síndico, dirigido al Alcalde, señalando “(...) **CONCLUSIONES** La situación descrita constituye jurídicamente una emergencia, conforme la Constitución, LOGIRD y normativa de contratación pública. El GAD Municipal tiene competencia exclusiva para intervenir en el sistema de alcantarillado. Existe sustento técnico suficiente que acredita el riesgo inminente. Procede la declaratoria de emergencia mediante resolución motivada del Alcalde. Es legalmente viable ejecutar contratación emergente para la obra propuesta. **V. RECOMENDACIONES** Emitir de manera inmediata la resolución motivada de declaratoria de emergencia, cumpliendo el Art. 58 de la LOSNCP, cuyo proyecto de resolución anexo. Calificar expresamente la emergencia como: concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Autorizar la contratación emergente del proyecto presentado, verificando: Relación directa con la emergencia Idoneidad del proveedor Razonabilidad del presupuesto Publicar la resolución en el portal del SERCOP dentro del plazo legal (...)”.

Que, mediante Resolución Administrativa Ejecutiva Nro. 103-AL-GADMPVM-2026, de fecha 27 de abril de 2026, suscrito por el Dr. Freddy Roberth Arrobo Arrobo, Alcalde de Pedro Vicente Maldonado, en la cual resuelve “**Artículo 1.- Declarar en emergencia el sistema de alcantarillado pluvial del Barrio Oñate Ramos, de la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, Cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, por ser una situación concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, reunir los elementos de caso fortuito y/o fuerza mayor, previstos en la Ley y en el Reglamento a la Ley de Contratación Pública. Artículo 2.- Acoger la recomendación técnica del Director de Agua Potable y Alcantarillado y disponer que se ejecuten los proyectos necesarios para rehabilitación, reposición y construcción emergente del sistema de alcantarillado pluvial, con el fin de garantizar la adecuada conducción, evacuación y manejo de aguas lluvias y vertientes, prevenir mayores afectaciones a la infraestructura pública y privada, y mitigar los riesgos a la seguridad de la población en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado (...)**”.

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-DAD-2026-0637-M, de fecha 27 de abril de 2026, suscrito por la Ing. Jenny Alexandra Bravo Vergara, Directora Administrativa (E), dirigido al Técnico Administrativo de Compras Públicas, señalando “(...) *Me permito solicitar de la manera más comedida, realice las gestiones necesarias, a fin de que se proceda con la publicación de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA EJECUTIVA Nro. 103-AL-GADMPVM-2026, “DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO”, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6.- Disponer al titular de la Dirección Administrativa para que a través de Compras Públicas, en forma inmediata, proceda a la publicación de la presente resolución en el portal de*

contratación pública www.compraspublicas.gob.ec, así como todos los procesos de contratación que se realicen en el periodo de emergencia”.

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-CPU-2026-0230-M, de fecha 28 de abril de 2026, suscrito por el Lcdo. Dennis Rodrigo Villavicencio Jumbo, Técnico Administrativo de Compras Públicas, dirigido a la Directora Administrativa (E), señalando *“En atención a la disposición mediante Resolución Administrativa Ejecutiva Nro. 103-AL-GADMPVM-2026 de publicar la “DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO” en el portal de compras públicas, me permito remitir el tramite una vez se ha procedido a publicar la emergencia, además se aclara que las publicaciones de las contrataciones provenientes de la emergencia se deberán coordinar con la dirección administrativa y el área de compras públicas, conforme lo determinado en el Art. 303 en adelante del RGLOSNC*”.

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-ALC-2026-1080-M, de fecha 28 de abril de 2026, suscrito por el Dr. Freddy Roberth Arrobo Arrobo, Alcalde de Pedro Vicente Maldonado, dirigido al Director de Agua Potable y Alcantarillado, señalando *“(…) En virtud de lo expuesto, remito el presente expediente, con la finalidad de continuar con el trámite correspondiente para la ejecución de los proyectos necesarios para rehabilitación, reposición y construcción emergente del sistema de alcantarillado pluvial, con el fin de garantizar la adecuada conducción, evacuación y manejo de aguas lluvias y vertientes, prevenir mayores afectaciones a la infraestructura pública y privada, y mitigar los riesgos a la seguridad de la población en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, conforme Resolución Administrativa Ejecutiva Nro. 103-AL-GADMPVM-2026”*.

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-DAPA-2026-0723-M, de fecha 28 de abril de 2026, suscrito por el Ing. Kleber Giovanni Cajamarca Quishpe, Director de Agua Potable y Alcantarillado, dirigido al Alcalde, señalando *“Con estos antecedentes Sr. Alcalde remito el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, por un monto de \$176,871.83 y un plazo de 30 días, para que disponga a quien corresponda la publicación de la necesidad de contratación en el portal de compras publicas para lo cual adjunto lo siguiente. Perfil del proyecto emergente Planos Especificaciones técnicas Apus Presupuesto Memoria técnica Calculo de volúmenes de obra Permiso ambiental VAE Informe de necesidad Tdrs de proyecto”*.

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-ALC-2026-1086-M, de fecha 28 de abril de 2026, suscrito por el Dr. Freddy Roberth Arrobo Arrobo, Alcalde de Pedro Vicente Maldonado, dirigido a la Directora Administrativa (E), señalando *“(…) Al respecto, y con la finalidad de garantizar la continuidad del debido proceso ante la DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD*

DE PEDROVICENTE MALDONADO, por necesidad urgente de mitigar los riesgos asociados a la afectación del sistema existente y preservar la seguridad de la población, AUTORIZO se proceda con la contratación para la "CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA", de conformidad a la documentación adjunta".

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-CPU-2026-0236-M, de fecha 29 de abril de 2026, suscrito por el Lcdo. Dennis Rodrigo Villavicencio Jumbo, Técnico Administrativo de Compras Públicas, dirigido a la Directora Administrativa (E), señalando *"En atención al memorándum Nro. GADMPVM-DAPA-2026-0723-M, solicito que previo a la publicación del proceso se conforme la comisión técnica que estará encargada de la verificación y calificación de las propuestas de los contratistas participantes, conforme lo requerido en el informe de necesidad y especificaciones técnicas del proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA".*

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-DAD-2026-0660-M, de fecha 29 de abril de 2026, suscrito por la Ing. Jenny Alexandra Bravo Vergara, Directora Administrativa (E), dirigido al Alcalde, señalando *"Con la finalidad de atender a lo solicitado mediante Memorando Nro. GADMPVM-CPU-2026-0236-M, suscrito por el Lic. Dennis Villavicencio, TÉCNICO DE COMPRAS PÚBLICAS, en el que textualmente dice "En atención al memorándum Nro. GADMPVM-DAPA-2026-0723-M, solicito que previo a la publicación del proceso se conforme la comisión técnica que estará encargada de la verificación y calificación de las propuestas de los contratistas participantes, conforme lo requerido en el informe de necesidad y especificaciones técnicas del proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA". Me permito solicitar de la manera más comedida, se proceda con la conformación de la comisión técnica que será la encargada de la verificación y calificación de las propuestas participantes en el antes mencionado proceso".*

Que, mediante Memorando Nro. GADMPVM-ALC-2026-1096-M, de fecha 29 de abril de 2026, suscrito por el Dr. Freddy Roberth Arrobo Arrobo, Alcalde de Pedro Vicente Maldonado, dirigido al Procurador Síndico, señalando *"En atención al Memorando Nro. GADMPVM-DAD-2026-0660-M, de fecha 29 de abril del 2026, suscrito por la Ing. Jenny Bravo, Directora Administrativa, AUTORIZO se proceda con la elaboración de la Resolución Administrativa Ejecutiva para la designación de la Comisión técnica del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA", misma que será la*

encargada de la verificación y calificación de las propuestas de los contratistas participantes en el antes mencionado proceso. La comisión técnica estará integrada por:

1. Un profesional que la máxima autoridad o su delegado designe, quien la presidirá: **ING. ROLANDO HERNÁNDEZ ROSALES**
2. El titular del área requirente o su delegado: **ING. JONATHAN ANTONIO URRESTA GALLARDO**
3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado: **ING. BRYAN GEOVANNY GUERRA SANDOVAL**
4. Alterno del presidente: **ING. BRYAN REA GORDÓN**”.

Que, mediante nombramiento del Consejo Nacional Electoral, que declara, una vez presentados los resultados definitivos de las elecciones seccionales del 2023, la Junta Provincial Electoral de la Provincia de Pichincha, confiere al señor Dr. Freddy Roberth Arrobo Arrobo, la credencial de Alcalde del GADM PEDRO VICENTE MALDONADO, para el periodo comprendido desde el 15 de mayo de 2023 al 14 de mayo de 2027.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; y, demás normativa conexas:

RESUELVO:

Artículo 1.- Designar la comisión técnica, misma que estará conformada por los funcionarios: Ing. Rolando Alfredo Hernández Rosales “Delegado de la Máxima Autoridad”; Ing. Jonathan Antonio Urresta Gallardo “Titular del Área Requirente”; Ing. Bryan Geovanny Guerra Sandoval “Profesional Afín al objeto de contratación”; y el Ing. Bryan Andrés Rea Gordón “Alternado del Presidente de la comisión técnica”, servidores que se encargaran de recibir, evaluar y calificar las ofertas para el proceso de emergencia: “CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA”.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa mediante Compras Públicas la publicación de la necesidad de contratación de “CONSTRUCCIÓN DE RED EMERGENTE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OÑATE RAMOS, CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA” en la herramienta “Necesidades para Emergencia” del Portal de Compras Públicas del SERCOP, conforme lo dispuesto en el artículo 306 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Artículo 3.- La recepción de las ofertas en el presente proceso de emergencia se enviarán al correo rhernandez@pedrovicentemaldonado.gob.ec, quienes culminado el término



establecido para la presentación de las ofertas de un día, contabilizado desde la publicación en el SERCOP, se reunirán como comisión para la apertura, evaluación y calificación, cuyo informe de calificación y recomendación de adjudicación será remitido a la máxima autoridad para la disposición de elaboración de contrato por parte de Asesoría Jurídica.

Artículo 4.- En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y más normas de carácter administrativo dictadas por el SERCOP.

Artículo 5.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Dirección Administrativa, conjuntamente con Compras Públicas y demás unidades, departamentos y Direcciones vinculadas al proceso.

Artículo 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y publicación en la página del portal informático www.compraspublicas.gob.ec.

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Vicente Maldonado, el día 29 de abril de 2026.

Notifíquese y cúmplase.-

Dr. Freddy Roberth Arrobo Arrobo
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO**